



**Consejo General de la Abogacía
Española**
Gabinete de Prensa

SEGUIMIENTO DE PRENSA



Resumen de:

**14 de marzo de 2005
Resumen Colegial**



RESUMEN COLEGIAL

El Colegio de Abogados, garantía de Justicia	ABC
Una sentencia certifica que se vulneran los derechos de los polizones	DEIA
El Presidente del TSJA inaugurará las jornadas de Procesos de Familia	FARO Melilla
Uno de los juzgados se especializará en junio en la Violencia de Género	Voz Almería
Tertulia sobre la mujer en la Abogacía	CÓRDOBA
Abogados y ONG alertan del endurecimiento del trato a los menores	EL PUNT



DIMES Y DIRETES

LUIS MARTÍ MINGARRO

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid



EL COLEGIO DE ABOGADOS, GARANTÍA DE JUSTICIA

El Colegio de Abogados de Madrid es una pieza más en el entramado institucional del Estado de derecho. Pero creo que aporta algunos elementos singulares. La unión corporativa de los abogados madrileños cumple una triple labor en su función de garantizar las libertades, la seguridad jurídica y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

En primer lugar, el Turno de Oficio del Colegio posibilita el acceso a la justicia, en plenitud de facultades, de los ciudadanos con menores recursos económicos, entre los que se cuentan de forma creciente los inmigrantes recién llegados a nuestro país. Es éste un servicio público que nuestro Colegio presta con los mayores estándares de calidad, como ha venido a ratificar la certificación de calidad Aenor que posee, revalidada año tras año. Casi 3.800 abogados integran este servicio, todos acreditados en sus respectivas materias por los rigurosos niveles de formación que les exige y les proporciona el Colegio. Del aprecio que la ciudadanía tiene por este servicio basta con proporcionar un dato: en 2004, se formularon 89.888 solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Madrid.

Justo es también mencionar que la

calidad y la fiabilidad de nuestro Turno de oficio ha sido reconocida recientemente por la Comunidad de Madrid, al elevar significativamente los módulos de retribución de los abogados de oficio, que sólo ahora ven compensados dignamente su profesionalidad y su entrega. Y como complemento a este servicio, los abogados del Colegio de Madrid mantienen también unos Servicios de Orientación Jurídica, ubicados en dependencias del Ayuntamiento y de la Comunidad y especializados en la problemática de los diferentes segmentos de edad, las mujeres, los extranjeros o los reclusos, que realizan gratuitamente una labor fundamental de atención a los ciudadanos que necesitan informarse sobre el ejercicio de sus derechos y la forma de reclamarlos ante los tribunales de Justicia.

«Durante el año 2004,

se formularon

89.888 solicitudes de

asistencia jurídica

gratuita en la Comunidad

de Madrid»

Junto a esta labor social, el Colegio de Abogados de Madrid vela por un estricto cumplimiento de la igualdad de armas en la administración de justicia. Nuestra Oficina de la Defensa lleva a cabo una evaluación continua de los juzgados y tribunales, ampara a los letrados que han tenido algún problema en el ejercicio de su funciones y colabora permanentemente con los representantes de la judicatura y la fiscalía para lograr la mayor eficiencia y las mejores garantías en nuestra administración de justicia. Un buen ejemplo de ello nos lo ofrece nuestra Oficina de Enlaces de Juicios Rápidos, que ha prestado un apoyo permanente a los abogados y ha colaborado decisivamente en la exitosa implantación en Madrid de este nuevo tipo de procedimientos.

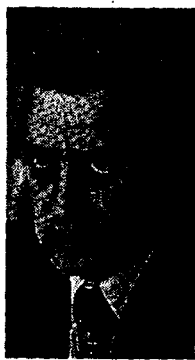
La tercera función reservada al Colegio de Abogados es la corrección y depuración de aquellas conductas profesionales reprobables por nuestro código ético. La limpieza de nuestras actuaciones, la lealtad debida a quien confía en nosotros su defensa o su asesoramiento, el secreto profesional que nos obliga y el cumplimiento de las normas deontológicas no son sólo un prurito corporativo sino la clave del arco de la confianza que la sociedad deposita en la función que el Estado de derecho ha reservado a los que tienen encomendada la defensa de los ciudadanos: los abogados. De ahí, que un estricto control deontológico sea la base de nuestra credibilidad y la garantía de nuestra independencia.

Este es, básicamente, el sentido de nuestro trabajo, cuya función última no es otra que la de hacer efectivas las libertades y garantías que le corresponden a cualquier ciudadano en cualquier tiempo y lugar, pero que son estrictamente exigibles en un estado democrático.

Una sentencia certifica que se vulneran los derechos de los polizones

EL PASADO 22 de diciembre fue un «día histórico en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes en todo el Estado». Así de exultante se mostró el presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro, al anunciar que la jueza Ana Isabel Martín, titular del Juzgado número 1 de Donostia, dictó la primera sentencia en todo el Estado español contra la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa, por la cual declara «nula la actuación administrativa consistente en el denegación de asistencia letrada» a cuatro polizones marroquíes que viajaban en el barco "Mersa Alam", que permaneció fondeado en el puerto de Pasajes entre los días 7 y 9 de junio del año pasado. La decisión judicial ratifica así las denuncias efectuadas por CEAR.

La jueza justifica su sentencia argumentando que la Subdelegación de Gobierno de Gipuzkoa «ha vulnerado un derecho fundamental susceptible de amparo al infringir el derecho a la tutela judicial efectiva». Y es que, según la Constitución, los extranjeros que se hallen en el Estado, al margen de su condición de



J. Galparsoro.ZA

«sin papeles», y que carezcan de recursos económicos suficientes «tienen derecho de asistencia jurídica gratuita». En su sentencia la jueza va más allá y afirma que, además de abogado, los recurrentes «tendrán derecho a la asistencia de un intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice». En este sentido, se ha podido comprobar que la Instrucción del Ministerio del Interior para el Tratamiento de Polizones Extranjeros –de obligado cumplimiento para la Policía Nacional– se limita formular cinco cuestiones: nombre, nacionalidad, si le han tratado bien durante el viaje, si se encuentra bien y un simple «¿quiere

añadir algo más?». «Difícilmente puede conocer sus derechos o formular su petición de entrada en el país, si no entiende lo que se le está preguntando», afirmó Galparsoro. «Esta Instrucción no pasa de ser una mera orden de actuación, un imperativo que se dicta a la policía, que en modo alguno puede alterar el contenido de la ley que reconoce sin ambages, el derecho del extranjero a la asistencia letrada», concluye esta «histórica» sentencia. LA.



El presidente del TSJA inaugurará las jornadas de Procesos de Familia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, inaugurará mañana las Jornadas sobre Procesos de Familia

LAURA G. TORRES MELILLA

■ El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, inaugurará mañana las Jornadas sobre Procesos de Familia, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Colegio de Abogados de Melilla, y que se prolongarán hasta el viernes.

Las jornadas, que están dirigidas por el vocal del CGPJ Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, comenzarán a las 17,00 horas en el Aula 10 del centro asociado de la Uned con el acto inaugural por parte de Méndez de Lugo.

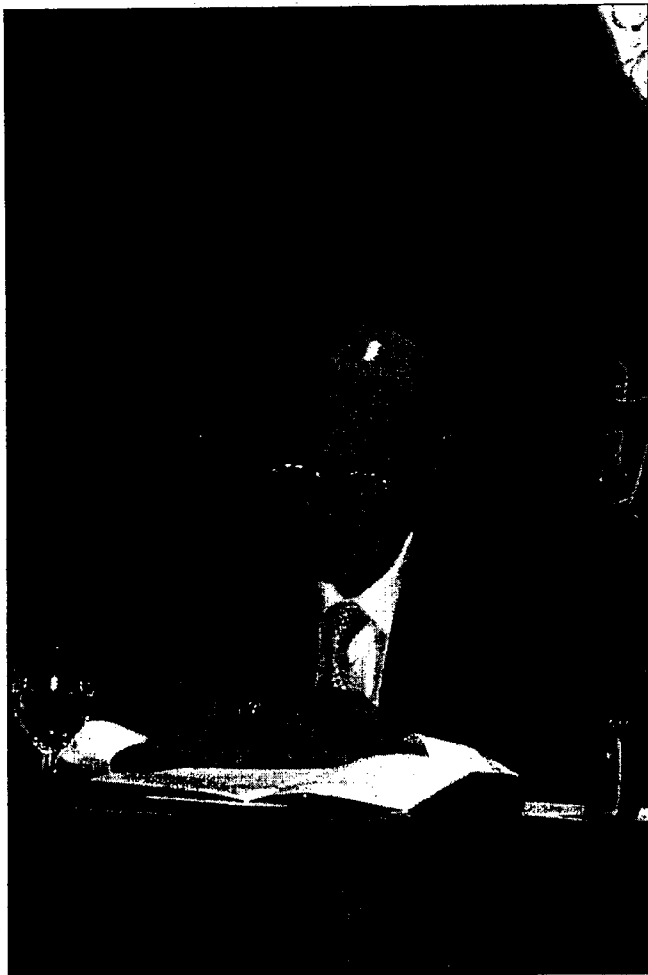
A continuación, a las 17,30 horas, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, presentará la ponencia "Procedimiento de mutuo acuerdo. Procedimientos Contenciosos".

A las 19,00 horas, intervendrá la magistrada y letrada del CGPJ Pilar González Valiente, con la ponencia "Medidas previas, provisionales y definitivas".

El viernes continuarán las Jornadas sobre Procesos de Familia con doble sesión por la mañana y por la tarde. Así, a las 10,00 horas, el fiscal coordinador de lo Civil y Mercantil de la Audiencia Provincial de Sevilla, Antonio Ocaña Rodríguez, pronunciará la conferencia "La liquidación del régimen ganancial: normas procesales".

A las 11,00 horas, la profesora titular de Derecho Civil y directora de Postgrado Experto en Mediación de la Universidad Complutense de Madrid, Leticia García Villaluenga, hablará sobre "La mediación".

A las 12,30 horas, el presidente de la Sección II de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez García, hablará de las uniones de he-



ARCHIVO

El presidente del TSJA inaugurará mañana las jornadas.

cho.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas, el magistrado de la Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, Juan Rafael Benítez Yébenes, pronunciará la conferencia "Juicios rápidos de familia".

La última conferencia será a las 18,00 horas y la impartirá el decano del Colegio de Abogados de Cartagena y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, Luis Ruipérez Sánchez,

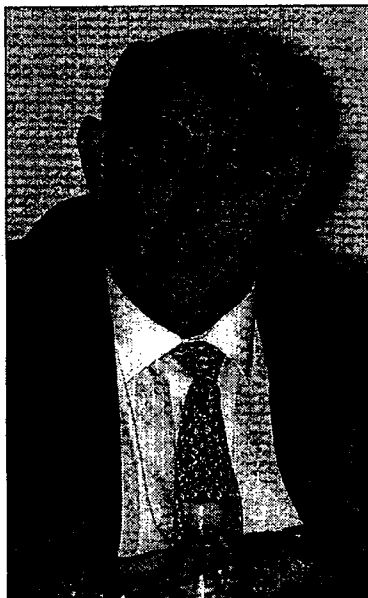
presentará la ponencia "La asistencia jurídica gratuita con especial referencia a los procesos matrimoniales", tras lo que se producirá el acto de clausura, a cargo de Gutiérrez-Alviz y del decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda.

Las jornadas tienen como coordinadores en Melilla a los letrados Antonio Zapata Navarro, María Victoria Fernández Sánchez, Francisca Gómez Díaz y Ana Calderón Paradela.

JUSTICIA

Uno de los juzgados se especializará en junio en la Violencia de Género

Durante estos últimos tres meses, sólo en la Policía Local, se han presentado 26 casos de denuncia de malos tratos



■ Manuel Ceba, delegado. / LA VOZ

■ RAQUEL MARTINEZ
EL EJIDO

La entrada en vigor, el próximo 29 de junio, de las medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conllevará que en El Ejido, uno de los cuatro Juzgados que existen y a la espera que se apruebe el número cinco, pase a especializarse en asuntos relacionados contra la violencia de género.

El procedimiento para la designación de este Juzgado se hará mediante una propuesta que elaborará la Junta de Jueces del Partido Judicial de El Ejido al Consejo General del Poder Judicial.

El Juzgado ejidense que sea designado, además del conocimiento exclusivo de los asuntos de violencia de género, atender, posiblemente, otros asuntos, en función de la carga de trabajo que se origine tras la entrada en vigor de esta Ley.

Los últimos datos ofrecidos por

la concejalía de la Mujer de El Ejido reflejan que en el municipio, y sólo desde el pasado mes de noviembre y hasta el día dos de marzo, se denunciaron, en la Policía Local, 26 casos de malos tratos, pero hay que sumar los casos que se hayan denunciado en otros cuerpos de seguridad.

También en Berja y Roquetas

El Ejido no será el único municipio que se beneficie de esta medida, también en los Juzgados de Berja y Roquetas de Mar se reconvertirá uno de los Juzgados para especializarlos en Violencia de Género.

El delegado de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Ceba aseguraba que "tendemos a la especialización de la Justicia y eso es muy positivo, porque va a aumentar la calidad de las sentencias. Con esta medida se persigue la especialización del Organismo Judicial, la facilidad para acumular los procedimientos penales, así como el conocimiento de los asuntos civiles relacionados o derivados de violencia de Género, ofreciendo una visión real y global de la situación de la víctima".

En Almería, la Junta de Jueces ya ha propuesto que sea el Juzgado número 6 el que tenga la exclusividad en este tema.

LA FRASE

"La especialización de la Justicia aumentará la calidad de las sentencias de los tribunales"

Manuel Ceba
delegado de Justicia
de Andalucía

► Colegio de Abogados Tertulia sobre la mujer en la abogacía

El Colegio de Abogados de Córdoba celebró ayer una tertulia sobre *La evolución de la mujer en la abogacía*, que contó con la presencia de los letrados Josefina Escobar del Rey, Amalia Ortiz-Ruiz, Filomeno Aparicio, Azela Guio-te, Soledad Muñoz y el magistrado Antonio Puebla. Después, el actor Miguel Ángel Vargas presentó un monólogo titulado *Consuelo*.



Advocats i ONG alerten de l'enduriment encobert del tractament penal dels menors

Critiquen el reglament que ha entrat en vigor aquesta setmana perquè contradiu l'esperit educatiu de la llei orgànica

S. BARROSO / M. ÀNGELS PAGÈS / Barcelona
● El reglament que desenvolupa parcialment la llei del 2000 de responsabilitat penal del menor, en vigor des de dimarts, ha estat mal rebut per l'advocacia i les

organitzacions de drets humans. Una plataforma de 150 ONG de tot l'Estat mantenen al Tribunal Suprem un recurs contra el reglament, tot i que de moment no han aconseguit la suspensió cautelar

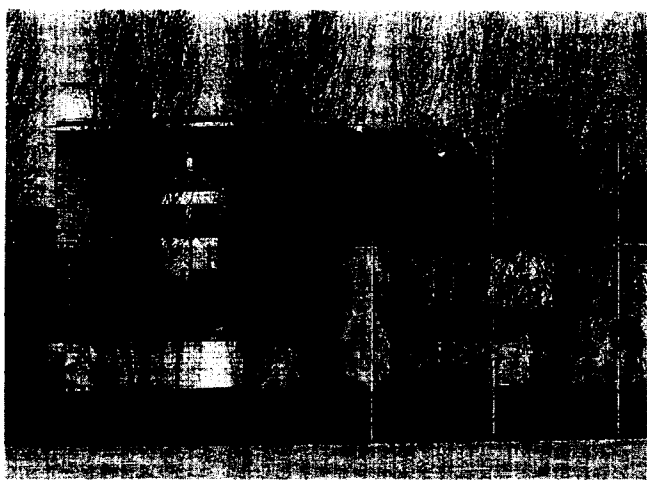
de la nova normativa. Tant la plataforma com advocats consultats per El Punt alerten que el reglament està pensat per garantir l'ordre als centres d'internament —amb mesures inspirades en el regla-

ment penitenciari d'adults— en lloc d'aprofundir en l'esperit educatiu de la llei. Judges i educadors, en canvi, veuen el reglament com una eina útil, encara que incompleta, per a la seva tasca.

L'efecte del reglament pot convertir una llei resocialitzadora en una eina únicament punitiva. Aquest és l'avertiment llançat aquesta setmana per les veus crítiques amb la norma que acaba d'entrar en vigor. «La introducció del reglament ja admet que únicament es desenvolupen alguns aspectes de la llei orgànica, i són els que parlen de mesures de control i no els educatius», adverteix Jordi Cabezas, advocat barceloní especialista en menors. El lletrat explica: «El contingut del reglament posa al descobert que mai ens hem cregut l'esperit educatiu de la llei orgànica.» Per això «no hi ha prou educadors als centres i són escassos els programes per aplicar mesures sense internament».

La saturació dels centres d'internament és la clau equivocada del reglament, segons Carme Guil, exfiscal de menors i actual responsable de formació del Consell de l'Advocacia de Catalunya. «El text incideix en els aspectes disciplinaris perquè respon a una demanda social, i no jurídica, de duresa, però també perquè reflecteix els problemes dels centres d'internament, fugides, motins i violència», adverteix. Malgrat que el problema és real, per Guil s'ha triat la solució equivocada. «El que cal és que hi hagi més places. Als centres massificats, la jurisdicció de menors és completament inútil, no és possible la tasca educadora i tot es limita a la contenció», sentència.

Entre les mesures més criticades hi ha l'aïllament i la suspensió de sortides programades —teòricament educatives— com a càstig sistemàtic contra la indisciplina. Pels advocats, aquesta mesura —que arriba a aïllaments de fins a set dies durant els quals el jove intern només pot sortir al pati dues hores al dia— perjudica la resocialització.



El centre d'internament de menors Els Tullers, a Mollet del Vallès. / RAMON FERRANDIS / EL 9 NOU.

PUNTS DE LA CONTROVERSIA

La detenció

► «Quan es detingui un menor se li podrà prendre l'empremta de les seves impressions dactilars i fotografies del seu rostre»

Funcionament dels centres

► «El menor ocuparà una habitació individual. No obstant això, si no hi ha raons mèdiques que ho desaconsellin, es podran compartir els dormitoris»
► «El menor podrà ser traslladat a un centre d'una altra comunitat autònoma en els casos

següents: [...] c) Quan l'entitat pública competent [la Generalitat], per raons de plena ocupació dels seus centres, no disposi d'una plaça adequada»

Visites

► «Quan es consideri que les comunicacions [visites] afecten negativament el dret [del menor] a l'educació, el director del centre ho posarà en coneixement del jutge, però podrà suspendre cautelarment

les comunicacions»

Disciplina

► «Només podran utilitzar-se els mitjans de contenció física pels motius següents: [...] d) Davant de la resistència activa o passiva a complir les instruccions del personal del centre»
► «Els mitjans de contenció que es podran utilitzar seran: a) La contenció física personal. b) Les defenses de goma [porres]. c) La subjecció mecànica. d) L'aïllament.

L'opinió | ALBERT NEBOT

Catalunya, pionera en justícia juvenil

El reglament que desenvolupa la llei [estatal] de responsabilitat penal dels menors suposa un pas endavant. La llei, de l'any 2000, és formalment penal, però materialment educativa i va introduir canvis significatius en la resposta penal als menors infractors: la franja d'edat d'aplicació —de 14 i a 18 anys— i el rebuig de finalitats del dret penal d'adults com ara la proporcionalitat entre infracció i sanció i la intimidació dels destinataris de la norma. Quatre anys després, els professionals de la justícia juvenil de Catalunya estem particularment preparats per assumir els canvis que comporta l'entrada en vigor del reglament, ja que l'any 2001 es va aprovar al Parlament la llei catalana de justícia juvenil. Així es van establir uns principis d'actuació d'acord amb les recomanacions de les Nacions Unides i el Consell d'Europa i molts aspectes que ara regula el reglament estatal.

La llei catalana, de caràcter més qualitatiu, regula mecanismes per assolir la reinserció social dels menors amb programes educatius i d'atenció individualitzada, l'especialització dels professionals i la participació d'altres instàncies. En aquest marc, el reglament que estem a punt de culminar és la culminació d'un procés legislatiu ambiciós i progressista. Regula la detenció del menor, la disciplina per garantir l'ordre als centres, l'actuació dels psicòlegs i treballadors socials en l'assessorament a judges i fiscals, els programes de mediació i les mesures no privatives de llibertat. Pels educadors, psicòlegs, pedagogs i treballadors socials el reglament dona un marc més estructurat i eines per a la tasca d'inserció. Disposem d'un bon marc legal i del bagatge de la llarga trajectòria de la justícia juvenil a Catalunya. El pas següent serà crear el reglament de la llei catalana i l'esforç continuat en l'adequació dels recursos, la investigació i l'especialització. Si no estalviem esforços, la nostra actuació farà que els adolescents infractors d'avui siguin, demà, els protagonistes d'una societat més cívica.

(Albert Nebot és director del centre de menors de Girona)

Imprescindible però incomplet, pels judges

● El reglament era imprescindible, segons el jutge de menors de Girona, Jordi Carreras, que creu que el règim disciplinari dels centres d'internament és «ajustat a dret». Per Carreras era necessari que s'establissin criteris i limitacions per a les sancions. La cara negativa del reglament, segons el jutge, és el buit en matèria d'educació i salut: el reglament no garanteix el dret a seguir estudis no obligatoris als centres d'internament. A Girona, un jove internat ha demanat matricular-se en un institut i que els professors es desplacin al centre. Pel que fa als buits sanitaris, Carreras creu que el reglament dona eines per als internaments terapèutics.

Poca incidència en les polítiques de reinserció

● Pel director general de Justícia Juvenil de la Generalitat, Josep Font, el reglament és «tan positiu» com la mateixa llei, però recorda que Catalunya ja tenia un règim disciplinari. Font creu que el reglament és molt complet, però també alerta que «vol ser tan garantista que pot provocar col·lapses». Ho exemplifica en els actes de mediació, en els quals serà obligada la presència del lletrat. «Això pot alentir el procés, que en els casos de faltes o delictes lleus, es podien solucionar ràpidament», puntualitza. També creu que el reglament hauria de garantir millor la tornada del jove internat a la societat, incidint més en les polítiques de reinserció.

Canviar la llei per la porta del darrere

● El reial decret 1774/2004, amb què el govern del PSOE va aprovar el reglament de la llei orgànica 5/2000 de responsabilitat penal del menor, «viola el sistema normatiu jeràrquic»: en lloc de concretar els manaments educatius establerts per la llei orgànica intenta variar-la, endurir-la per la via del règim disciplinari i modificar-ne la funció. Aquest és el principal argument jurídic del recurs presentat al Suprem per l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia i la Coordinadora de Barris de Madrid, que lideren una plataforma de la qual formen part 150 col·lectius, entre els quals hi ha la Coordinadora contra la Marginalització de Cornellà de Llobregat.